

Recurso 346/2019

Resolución 397/2019

**RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA**

Sevilla, 22 de noviembre de 2019.

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la **FEDERACIÓN DE EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES EN CÓRDOBA** contra el anuncio y el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el procedimiento de licitación del contrato denominado “Servicio de actividades de carácter doméstico y personal que integran el servicio de ayuda a domicilio a aquellas personas a las que se les reconozca el derecho de acceso al mismo, según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia” (Expte. 1259/2019), convocado por el Ayuntamiento de Villanueva del Duque (Córdoba), este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha, ha dictado la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El 14 de agosto de 2019, se publicó en el perfil de contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de la licitación, por procedimiento abierto, del contrato indicado en el encabezamiento, día en que asimismo los pliegos fueron puestos a disposición de las posibles personas interesadas en dicho perfil.

El valor estimado del presente contrato asciende a la cantidad de 572.850,00 euros.



SEGUNDO. A la presente licitación le es de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Igualmente, se rige por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante Real Decreto 817/2009) y por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se opongan a lo establecido en la citada LCSP.

TERCERO. El 30 de agosto de 2019, tuvo entrada en el registro del órgano de contratación escrito de recurso especial en materia de contratación interpuesto por la FEDERACIÓN DE EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES EN CÓRDOBA (en adelante FESP UGT CÓRDOBA) contra el anuncio y el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). En su escrito de recurso, la federación sindical recurrente solicita, entre otras cuestiones, la suspensión del procedimiento de licitación. Dicho escrito de recurso fue remitido por el órgano de contratación teniendo entrada en este Tribunal el 4 de septiembre de 2019.

Por la Secretaría de este Órgano, el 5 de septiembre de 2019, se solicita al órgano de contratación que remita la documentación necesaria para su tramitación y resolución, lo que tuvo lugar los días 13 y 17 de septiembre de 2019.

CUARTO. Previa petición de la Secretaría del Tribunal, la federación sindical recurrente aporta determinada documentación para la subsanación de su escrito de interposición del recurso, en concreto sus estatutos y la declaración de vigencia del poder de representación de la persona firmante del recuso.

QUINTO. Por Resolución de este Tribunal, de 2 de octubre de 2019, se adopta la medida cautelar de suspensión del procedimiento de licitación solicitada por la federación sindical recurrente.

SEXTO. Con fecha 18 de octubre de 2019, la Secretaría del Tribunal concedió un plazo de 5 días hábiles a las entidades licitadoras para que formularan las alegaciones que considerasen oportunas, no habiéndose recibido ninguna en el plazo establecido.



SÉPTIMO. En la tramitación del presente recurso con carácter general se han cumplido los plazos legales salvo el previsto para resolver en el artículo 57.1 de la LCSP, dada la acumulación de asuntos existente en este Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Este Tribunal resulta competente para resolver en virtud de lo establecido en el artículo 46.1 de la LCSP, en el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía y en la Orden de 14 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se acuerda el inicio del funcionamiento del citado Tribunal.

En el supuesto examinado, conforme a la documentación remitida a este Tribunal, el Ayuntamiento de Villanueva del Duque (Córdoba) aun cuando no ha puesto de manifiesto que no dispone de órgano propio especializado, por sí o a través de la Diputación Provincial, ha remitido a este Órgano la documentación preceptiva a efectos de la resolución del recurso especial en materia de contratación, por lo que de conformidad con el artículo 10.3 del citado Decreto autonómico, en su redacción dada por el Decreto 120/2014, de 1 de agosto, resulta competente para su conocimiento el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.

SEGUNDO. Con carácter previo al estudio de los restantes motivos de admisión, procede abordar la legitimación de la federación sindical recurrente para la interposición del presente recurso especial.

Al respecto, el artículo 48 de la LCSP establece que *«Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.*

Estarán también legitimadas para interponer este recurso, contra los actos susceptibles de ser recurridos, las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales



o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación. En todo caso se entenderá legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados».

Asimismo, el artículo 24, apartado 1 del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual (en adelante el Reglamento), aprobado por Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, señala que *«Sin perjuicio de los supuestos generales previstos en el artículo 42 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el 102 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, los recursos regulados en este Reglamento podrán ser interpuestos por las asociaciones representativas de intereses relacionados con el objeto del contrato que se impugna exclusivamente cuando lo sean para la defensa de los intereses colectivos de sus asociados».*

En el supuesto examinado, la FESP UGT CÓRDOBA al impugnar los pliegos, alega que los mismos repercuten en la esfera jurídica de las personas trabajadoras a los que representa al entender que tanto el precio unitario como el coste del servicio no cumplen con el convenio colectivo de aplicación, por lo que de adjudicarse en tales términos se incumplirían por la empresa adjudicataria las obligaciones sociales y/o laborales respecto de las personas trabajadoras que participen en la realización de la prestación.

Queda justificado por tanto, a juicio de este Tribunal, el interés colectivo que representa la confederación sindical recurrente en defensa de los derechos de las personas trabajadoras afectadas por la contratación proyectada.

TERCERO. Visto lo anterior, procede determinar si el recurso se refiere a alguno de los supuestos contemplados legalmente y si se interpone contra alguno de los actos susceptibles de recurso en esta vía, de conformidad con lo establecido respectivamente en los apartados 1 y 2 del artículo 44 de la LCSP.

El objeto de la licitación es un contrato de servicios con un valor estimado de 572.850,00 euros, convocado por un ente del sector público con la condición de Administración Pública, y el objeto del recurso es el anuncio y el PCAP, por lo que el acto recurrido es susceptible de recurso especial en materia de contratación al amparo del artículo 44 apartados 1.a) y 2.a) de la LCSP.



CUARTO. En cuanto al plazo de interposición del recurso, los apartados a) y b) del artículo 50.1 de la LCSP, disponen que: *«El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:*

a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante.

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido a través del perfil de contratante».

En el supuesto examinado, el anuncio y los pliegos se publicaron el 14 de agosto de 2019 en el perfil de contratante en la Plataforma de Contratación del Sector Público, poniéndose ese día a disposición de las entidades interesadas el contenido de dichos pliegos y demás documentos contractuales. En consecuencia, al haberse presentado el escrito de recurso el 30 de agosto de 2019 en el registro del órgano de contratación, el mismo se ha interpuesto dentro del plazo legal antes expresado.

QUINTO. Analizados los requisitos de admisión del recurso, procede examinar los motivos en que el mismo se sustenta que serán analizados en este y en los siguientes fundamentos de derecho.

La federación sindical recurrente interpone el presente recurso contra el anuncio y el PCAP que rige el procedimiento de licitación solicitando que, con estimación del mismo, se proceda a la anulación del anuncio de licitación y de la cláusula de dicho pliego referida en el cuerpo del recurso.

Denuncia que la cláusula del PCAP relativa al presupuesto base de licitación y al valor estimado del contrato debe ser anulada, pues a su juicio ni en un caso ni en el otro, por un lado, aparece desglosado en dicho pliego, y por otro lado, el precio hora del servicio licitado es insuficiente para su prestación, no pudiendo la empresa adjudicataria cumplir sus obligaciones sociales y/o laborales respecto de las personas trabajadoras que participen en la ejecución del contrato.

Por su parte, el órgano de contratación en su informe al recurso afirma que el cálculo del presupuesto base de licitación, el valor estimado y el precio del contrato se ha efectuado de conformidad con las previsiones



normativas que regulan la materia, tanto los artículos 100 y 101 de la LCSP, la Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VII convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, el artículo 22.1 de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en sus diversas modificaciones, atendiendo al número de horas anuales prestadas en el municipio y al coste por hora, no pudiendo superar el límite del coste de 13 euros por hora máximo actualmente fijado por la Comunidad Autónoma, tal y como se recoge en la estipulación quinta del convenio específico de colaboración, suscrito entre el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba y el Ayuntamiento de Villanueva del Duque para la gestión del servicio público de ayuda a domicilio durante el ejercicio 2019.

SEXTO. Con respecto al primer alegato, en el que la federación sindical recurrente afirma que el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato no aparecen desglosados en el PCAP, el recurso tras transcribir parte de la cláusula sexta de dicho pliego relativa -a su juicio- a ambas cuestiones y los artículos 100.2, 101.2 y 5 de la LCSP, señala, por un lado, que el presupuesto base de licitación ni indica los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación, ni los costes salariales estimados de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional, no habiéndose tenido en cuenta lo dispuesto en el convenio colectivo de aplicación, y por otro lado, que en el valor estimado del contrato no se acredita, especifica o desglosa por qué el precio por hora licitado es el resultado de la aplicación del VII convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal (Boletín Oficial del Estado de 21 de septiembre de 2018) y los preceptos normativos relacionados con la prevención de riesgos laborales, debiendo repercutirse el beneficio industrial y otros costes que no incluye en el recurso al no ser de su competencia, pero que constituye un requisito establecido en el artículo 101.2 de la LCSP.

Pues bien, sobre la cuestión controvertida se ha pronunciado este Tribunal ya con la nueva LCSP en varias ocasiones, entre las más recientes, en las Resoluciones 259/2019, de 9 de agosto, 323/2019, de 10 de octubre, 335/2019, de 18 de octubre y 352/2019, de 24 de octubre. En la primera de ellas, tras transcribir los artículos 100.2, 101.2 y 102.3 de la LCSP, se señalaba que *«Así pues, de los preceptos transcritos (...), puede extraerse como conclusión que para el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, los costes*



resultantes de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial, debiendo dentro del presupuesto base de licitación consignarse de manera desglosada en el PCAP o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación y para el supuesto que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato -circunstancia que concurre en el supuesto examinado-, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia; obviamente, dichas exigencias en el supuesto de que el contrato prevea su división en lotes habrán de cumplirse para cada uno de los lotes en que aquel se divida.

En el sentido expuesto en el párrafo anterior se ha manifestado este Tribunal, entre otras, en sus Resoluciones 231/2018, de 30 de julio, 233/2018, de 2 de agosto, 271/2018, de 28 de septiembre, 99/2019, de 4 de abril y 192/2019, de 13 de junio, y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, entre otras, en sus Resoluciones 632/2018, de 29 de junio y 389/2019, de 17 de abril.».

En el supuesto examinado, la regulación del presupuesto base de licitación y del valor estimado del contrato se recoge en la cláusula sexta del PCAP que dispone en lo que aquí atañe lo siguiente:

«6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.

6.1.- El presupuesto base de licitación formulado por el Ayuntamiento de Villanueva del Duque asciende a la cantidad de 198.588,00€ (ciento noventa y ocho mil quinientos ochenta y ocho euros), incluidos los tributos de cualquier índole que sean de aplicación y el I.V.A.(4%), ascendiendo este ultimo a 7.638,00€.

Respecto a los lotes, se indica en la clausula 1.2, el contrato no se dividirá en lotes.

6.2.- El valor estimado del presente contrato asciende a la cantidad de 572.850,00 € determinado conforme a lo establecido en el artículo 101 LCSP.

El valor estimado del contrato no es coincidente con el de Presupuesto Base de Licitación al existir dos eventuales prorrogas.

6.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicación del mismo se determina el presupuesto a tanto alzado por hora de prestación del servicio y de horas estimadas, el cual no podrá superar el limite de coste de 13€/Hora actualmente fijado por la Comunidad Autónoma o cualquier otro señalado por esta en caso de modificación, estableciéndose la previsión de horas de prestación del servicio en el municipio de Villanueva del Duque, para el ejercicio 2019, en función del numero de usuarios actualmente activos y la previsión del coste de la prestación, calculado al coste/hora máximo, estipulado por la Comunidad Autónoma, conforme a los datos contenidos en la Addenda al Convenio de Colaboración 2019.



Las horas anuales son 15.276 con un coste total de 198.588,00 €. El precio cumple con las previsiones convencionales del VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal (BOE 21 de septiembre de 2018) (...)».

Así las cosas, el presupuesto base de licitación configurado en la cláusula sexta del PCAP no cumple las exigencias del artículo 100.2 de la LCSP, dado que no desglosa los costes directos e indirectos, ni detalla otros eventuales gastos para su determinación; asimismo, al tratarse de un contrato de servicios y formar parte del precio total del mismo el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución, dicho pliego no indica de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

Asimismo, en cuanto al valor estimado del contrato, en la citada documentación se indica el importe del valor estimado del contrato y que no coincide con el presupuesto base de licitación al existir la posibilidad dos eventuales prorrogas, no figurando lo exigido en el artículo 101 de la LCSP, dado que, entre otras cuestiones, no se detalla si se ha tenido en cuenta para su cálculo, entre otras circunstancias, los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, los derivados de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial (primer párrafo del apartado 2 del artículo 101). Por último, al tratarse de un contrato de servicios en el que es relevante la mano de obra, asimismo, no se detalla si se han tenido en cuenta especialmente los costes laborales derivados de los convenios colectivos de aplicación.

En este sentido, ha de tenerse en cuenta que el artículo 100.2 de la LCSP exige que el desglose de costes en los términos allí recogidos se realice en el PCAP o en el documento regulador de la licitación, circunstancias que no se dan en el supuesto examinado.

En efecto, la literalidad del artículo 100.2 de la LCSP, y por ende del 101.2 de la misma, es clara cuando impone y exige que sea el PCAP o el documento regulador de la licitación, donde se desglosen los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación y los costes salariales estimados de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional.

En el supuesto examinado, como se ha expuesto, en la cláusula sexta del PCAP, es donde queda configurado el presupuesto base de licitación, en el que se contempla únicamente una cantidad global, IVA



incluido, y su importe correspondiente. Asimismo, en cuanto al valor estimado del contrato, se indica únicamente el importe global y que no coincide con el presupuesto base de licitación al existir la posibilidad de eventuales prorrogas.

En definitiva, queda claro que no se incorporan en el PCAP -o en el documento regulador de la licitación- las exigencias previstas en los artículos 100.2 y 101.2 de la LCSP.

En consecuencia, en base a las consideraciones realizadas, el PCAP en el sentido expuesto vulnera los artículos 100.2 y 101.2 de la LCSP.

Procede, pues, estimar el primer alegato del recurso.

SÉPTIMO. A continuación, como segundo y último motivo del recurso, la recurrente denuncia que la licitación es inviable pues el precio hora del servicio licitado es insuficiente para su prestación. En este sentido, formula un estudio económico que, en síntesis, expresa que el precio por hora para poder ejecutar la prestación que se licita asciende a 14,60 euros, IVA incluido, importe que está por encima del precio de licitación fijado de 13,00 euros, IVA incluido; y ello según manifiesta la federación sindical recurrente considerando exclusivamente la mano de obra y los costes directos conforme al convenio colectivo de aplicación, a lo que habrá de repercutirse el beneficio industrial y otros costes que no incluye en el recurso al no ser de su competencia, pero que constituye un requisito establecido en el artículo 101.2 de la LCSP.

En este sentido, señala la recurrente que conforme al convenio colectivo de aplicación se ha de tener en cuenta en la elaboración del presupuesto base de licitación y del valor estimado del contrato, los costes relativos a las tablas salariales, a la ropa, a los equipos de protección individual y a la subrogación. Asimismo, indica que habrán de incluirse los costes relativos a la prevención de riesgos laborales.

Pues bien, la estimación del anterior alegato, y con ello la anulación del anuncio y el PCAP para que en su caso se proceda por el órgano de contratación a dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 100.2 y 101.2 de la LCSP, supone que en los nuevos que en su caso se aprueben se deberán reflejar, en el PCAP -o en el documento regulador de la licitación- para el presupuesto base de licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos, así como los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional, y para el valor



estimado del contrato se han de tener en cuenta los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, los costes resultantes de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial, debiendo figurar en el PCAP para su cálculo el método aplicado por el órgano de contratación.

En ese sentido, una vez aprobado en su caso el nuevo PCAP será cuando se pueda apreciar si el presupuesto base de licitación cubre los costes salariales así como el resto de gastos en los términos que demanda la asociación recurrente.

En efecto, una vez que el órgano de contratación proceda a dar cumplimiento a lo establecido en lo que aquí interesa por los artículos 100.2 y 101.2 de la LCSP es posible que el presupuesto base de licitación, y en consecuencia el valor estimado del contrato, pueda variar ya sea al alza o a la baja, lo que unido al preceptivo desglose de aquellos, permitirá verificar en su caso lo ahora denunciado por la recurrente (v.g. Resoluciones, 231/2018, de 30 de julio, 99/2019, de 4 de abril y 323/2019, de 10 de octubre, de este Tribunal y, en sentido similar, Resolución 883/2018, 5 de octubre, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales).

Asimismo, con respecto al concreto alegato de la federación sindical recurrente relativo a que en la elaboración del presupuesto base de licitación y del valor estimado del contrato, el órgano de contratación ha de tener en cuenta los costes relacionados con las personas trabajadoras a las que afecte la subrogación, este Tribunal ha tenido ocasión de manifestarse al respecto, así entre otras en sus Resoluciones 233/2018, de 2 de agosto y en la 271/2018, de 28 de septiembre, en las que dispone que para la elaboración del presupuesto base de licitación se ha de tener en cuenta que el cálculo de las personas trabajadoras necesarias para la prestación de los servicios objeto del contrato no deriva de la subrogación o no del personal actual, sino de los requisitos de la prestación establecidos en los pliegos. De forma similar se ha pronunciado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su Resolución 156/2019, de 22 de febrero, con cita de abundante doctrina del citado Órgano.

En efecto, a la hora de fijarse el presupuesto base de licitación de un contrato el órgano de contratación debe tener en cuenta el principio de eficiencia y los objetivos de estabilidad presupuestaria que se consignan en el artículo 1 de la LCSP, sin que a la hora de definir las condiciones de la licitación esté



vinculado por contrataciones anteriores no estando obligado a mantener el mismo personal que ejecutaba la prestación anterior, debiendo contemplarse a los efectos de su cálculo los costes laborales del personal necesario para ejecutar la prestación conforme a lo definido en los pliegos y no de aquel que pueda estar desempeñando sus servicios en la contrata anterior. En este sentido, una vez que opere la subrogación con la nueva entidad adjudicataria, es posible que determinadas personas trabajadoras de forma voluntaria no se subroguen con el nuevo empleador, o que éste a algunas de las subrogadas las asigne a otras funciones o que, en algunos casos, incluso proceda a prescindir de sus servicios.

OCTAVO. La corrección de la infracción legal cometida, y que ha sido analizada y determinada en los fundamentos de derecho de esta resolución, debe llevarse a cabo anulando el anuncio de licitación y el PCAP que rige el procedimiento de adjudicación del contrato citado en el encabezamiento, conforme a lo establecido en dichos fundamentos, así como los actos del expediente de contratación relacionados con su aprobación, debiendo, en su caso, convocarse una nueva licitación.

Por lo expuesto, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal

ACUERDA

PRIMERO. Estimar parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la **FEDERACIÓN DE EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES EN CÓRDOBA** contra el anuncio y el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el procedimiento de licitación del contrato denominado “Servicio de actividades de carácter doméstico y personal que integran el servicio de ayuda a domicilio a aquellas personas a las que se les reconozca el derecho de acceso al mismo, según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia” (Expte. 1259/2019), convocado por el Ayuntamiento de Villanueva del Duque (Córdoba) y, en consecuencia, anular ambos actos en el sentido expuesto en la presente resolución, así como los del expediente de contratación relacionados con su aprobación, debiendo en su caso convocarse una nueva licitación.



SEGUNDO. Acordar, de conformidad con lo estipulado en el artículo 57.3 de la LCSP, el levantamiento de la suspensión del procedimiento de adjudicación, adoptada por este Tribunal mediante Resolución de 2 de octubre de 2019.

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 57.4 de la LCSP, el órgano de contratación deberá dar conocimiento a este Tribunal de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a la presente resolución.

CUARTO. Notificar la presente resolución a las partes interesadas en el procedimiento.

Esta resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

